BOLETÍN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

XV LEGISLATURA

Serie B:
PROPOSICIONES DE LEY **10 de octubre de 2025** **Núm. 267-1** **Pág. 1**

PROPOSICIÓN DE LEY

122/000222 Proposición de Ley Orgánica para la recuperación de la justicia universal.

Presentada por el Grupo Parlamentario Republicano.

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(122) Proposición de ley de Grupos Parlamentarios del Congreso.

Autor: Grupo Parlamentario Republicano

Proposición de Ley Orgánica para la recuperación de la justicia universal.

Acuerdo:

Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2025.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, **Fernando Galindo Elola-Olaso.**

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Francesc-Marc Álvaro i Vidal y de la Diputada Pilar Vallugera i Balañà, al amparo del que se establece en el artículo 124 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición de Ley Orgánica para la recuperación de la justicia universal, para su debate en Pleno.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre de 2025.—**Pilar Vallugera Balañà y Francesc-Marc Álvaro Vidal,** Diputados.—**Gabriel Rufián Romero,** Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.

cve: BOCG-15-B-267-1

PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA PARA LA RECUPERACIÓN DE LA JUSTICIA UNIVERSAL

Exposición de motivos

El principio de justicia universal es una conquista irrenunciable de la humanidad y del sistema de normas y principios que las sociedades democráticas deben defender a ultranza para gobernar las relaciones internacionales. Según este principio, es necesario garantizar que los crímenes de derecho internacional puedan perseguirse desde cualquier país para asegurar que nunca quedarán impunes. Esta perspectiva tiene una base moral sólida y forma parte del sistema de justicia internacional más allá de los intereses y valores puramente estatales o particulares.

Esta defensa de los derechos humanos es más necesaria que nunca en un contexto de debilitamiento del sistema multilateral, incluido el Tribunal Penal Internacional, y de graves crisis humanitarias que tienen responsables y víctimas. Los genocidios en Gaza y Sudán y las violaciones del derecho internacional humanitario en las decenas de conflictos en curso interpelan a los Estados a perseguir estos crímenes precisamente para proteger los principios generales consagrados por el derecho internacional.

El Estado español ha suscrito múltiples compromisos internacionales en materia de justicia universal. En concreto y entre otros: el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, suscrito por el Estado español en 1977, que estipula que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; el artículo 6 de la Convención de la ONU contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de 1984, que establece un mandato a los Estados para que investiguen este tipo de hechos, al menos de manera preliminar, sin hacer depender este deber de la nacionalidad o vínculo del posible reo con el Estado; y, por último, el Convenio para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, de 1950, del Consejo de Europa, que regula la obligación de los Estados de proteger la vida y el deber de reconocer a cualquier persona de su jurisdicción los derechos reconocidos en el convenio en cuestión. Del mismo modo, la Resolución 60/147 de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 2005, aprobó los principios y directrices básicas sobre el derecho de las víctimas de violaciones de normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Unos principios contenidos en la Resolución 2005/35, de 19 de abril de 2005, de la Comisión de Derechos Humanos.

A estas obligaciones se le suman las adquiridas por el Estado español con la ratificación de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, de 18 de diciembre de 1992, y la Convención Internacional para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas, de 20 de diciembre de 2006. También cabe destacar las directrices sobre protección de las víctimas de actos terroristas adoptadas por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, el 16 de marzo de 2005.

A la luz de estas obligaciones, el Estado español tiene el deber de hacer comparecer ante la justicia a los autores de delitos de derecho internacional, sin condicionamientos ni limitaciones por razón de país, de persona que los cometa o de víctima, tal y como ha ratificado el Tribunal Constitucional. Esto supone el deber de incorporar al derecho interno estos delitos, para garantizar la rendición de cuentas sobre crímenes de derecho internacional y para garantizar que los tribunales del Estado español realicen esta tarea.

La Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, reconocía en su artículo 23.4 el principio de justicia universal en el Estado español. Sin embargo, en los últimos 16 años, este principio ha sido objeto de dos importantes reformas que lo han dejado prácticamente inaplicable. En noviembre de 2009, la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial limitó el alcance de la persecución de delitos internacionales a aquellos que mantuvieran una «conexión relevante» con el Reino de España y siempre y cuando no se hubiera iniciado otra investigación por los mismos hechos. Unos requisitos que contradicen la

cve: BOCG-15-B-267-1

propia naturaleza del delito y el principio de concurrencia que rige la jurisdicción universal. Esta reforma hace imposible garantizar que no queden impunes vulneraciones de derechos humanos en las que no se pueden determinar las conexiones con cada Estado de forma previa a su investigación.

La segunda reforma, de marzo de 2014, supuso en la práctica el fin del principio de justicia universal, exigiendo que el presunto autor fuera de nacionalidad española o residente habitual en el Estado. También suprimió las acusaciones populares del ejercicio de la jurisdicción universal, una herramienta clave para que entidades de derechos humanos y ONGs ayuden a hacer justicia en delitos de derecho internacional, limitando así la acción penal al ministerio fiscal y acusaciones particulares. A causa de esta reforma se archivaron causas como los genocidios en el Tíbet, Ruanda o Guatemala, las torturas en Guantánamo o el asesinato de José Couso a manos de soldados norteamericanos en Irak, en el año 2023.

Esta proposición de ley pretende recuperar una auténtica jurisdicción universal en el Estado español, que había permitido perseguir crímenes en Argentina, Chile o Guatemala en el pasado, revirtiendo una tendencia cada vez más restrictiva en la aplicación de este principio que pone en entredicho la calidad de la justicia española. La justicia universal constituye un derecho y un deber para los Estados de perseguir las peores vulneraciones de derechos humanos, sin limitaciones procesales, de competencia territorial o de nacionalidad de sus autores.

Esta reforma también vuelve a alinear la legislación española con la de países del entorno europeo que incorporan el principio de jurisdicción universal sin vinculación de intereses estatales o particulares. Son ejemplos de ello el artículo 7 de la Ley de 16 de junio de 1993 de Bélgica, reformada por la Ley de 5 de agosto de 2003; la reforma del código penal de 17 de diciembre de 2024 de Dinamarca; en Suecia, la Ley de responsabilidad penal por genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra de 2014; el artículo 7.5 del Código Penal de Italia; o el Código de Crímenes contra el Derecho Internacional de Alemania, donde en los últimos años se han perseguido crímenes de guerra y contra la humanidad en Ruanda, Siria o Gambia.

Por estos motivos, esta proposición de ley modifica el artículo 23 de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial. En concreto, se modifica el apartado 2 para limitar la aplicación de la jurisdicción universal a casos donde el acusado ya haya sido absuelto o condenado. También se modifica la lista de delitos previstos por el derecho internacional que se puedan perseguir desde una perspectiva de la justicia universal, eliminando los condicionantes que imposibilitaban la aplicación de este principio como resultado de las reformas anteriores. Por último, se incluye una disposición transitoria para permitir reabrir aquellos procesos archivados como resultado de la aplicación de la reforma de la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo.

Artículo único. *Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.*

La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se modifica en los siguientes términos:

Uno. Se modifican los apartados 2, 4 y 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, quedando todos ellos redactados de la siguiente manera:

> «2. También conocerá la jurisdicción española de los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminales responsables fueren españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho y concurrieren los siguientes requisitos:
>
> a) Que el hecho sea punible en el lugar de ejecución, salvo que, en virtud de un Tratado internacional o de un acto normativo de una Organización internacional

cve: BOCG-15-B-267-1

de la que España sea parte, no resulte necesario dicho requisito, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados siguientes.

b) Que la víctima, el Ministerio Fiscal o personas jurídicas legalmente constituidas y sin ánimo de lucro cuyo objeto estatutario principal sea la defensa de los derechos humanos interpongan querella o denuncia ante los Tribunales españoles. Este requisito se considerará cumplido en relación con los delitos competencia de la Fiscalía Europea cuando esta ejercite efectivamente su competencia.

c) Que el delincuente no haya sido absuelto, amnistiado, indultado o penado en el extranjero, o, en este último caso, no haya cumplido la condena. Si sólo la hubiere cumplido en parte, se le tendrá en cuenta para rebajarle proporcionalmente la que le corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, las medidas de gracia no excluirán el ejercicio jurisdiccional cuando su tramitación o concesión vulnere los tratados internacionales suscritos por España, en especial los de derechos humanos. Tampoco lo hará la absolución por prescripción si el delito es imprescriptible según dichos tratados o el derecho penal español.»

«4. Igualmente, será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles, extranjeros o personas jurídicas fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley española, como alguno de los siguientes delitos:

a) Genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado.

b) Terrorismo.

c) Tortura y delitos contra la integridad moral de los artículos 174 a 177 del Código Penal.

d) Piratería, apoderamiento ilícito de aeronaves y delitos contra la seguridad de la navegación marítima.

e) Delitos contra la seguridad de la aviación civil.

f) Delitos relativos a la protección física de materiales nucleares, siempre que el delito se haya cometido por un ciudadano español.

g) Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores e incapaces.

h) Tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes.

i) Trata de seres humanos y tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, sean o no trabajadores.

j) Delitos relativos a la mutilación genital femenina.

k) Delitos relativos a la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, siempre que el procedimiento se dirija contra un español, contra un extranjero residente en España, o si el delito se hubiera cometido contra una víctima española o residente en España.

l) Falsificación de moneda extranjera.

m) Delitos de corrupción entre particulares o en las transacciones económicas internacionales.

n) Delitos de desaparición forzada.

o) Delitos de esclavitud.

p) Delitos graves contra el medio ambiente que estén previstos en los tratados internacionales.

q) Cualquier otro delito que, según los tratados y convenios internacionales, en particular los Convenios de derecho internacional humanitario y de protección de los derechos humanos, deba o pueda ser perseguido en España.

La competencia por jurisdicción universal subsistirá aunque exista procedimiento en curso en otro Estado o Tribunal Internacional, salvo que el

cve: BOCG-15-B-267-1

mismo garantice de forma plena, independiente e imparcial la investigación y enjuiciamiento conforme a estándares internacionales, valorándose especialmente los derechos de las víctimas.»

«5. En los supuestos de los apartados 3 y 4 será de aplicación lo dispuesto en la letra c) del apartado 2 de este artículo.»

Dos. Se suprime el apartado 6 del artículo 23 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Disposición transitoria única.

Los procesos sobreseídos o archivados en aplicación de la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, deberán ser reabiertos de oficio en los juzgados o tribunales encargados de la instrucción o los que conocían de los mismos en el momento de entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2014. Lo establecido en esta disposición transitoria aplicará con independencia del estado de dichos procesos, de los recursos presentados y del tribunal que conociera su resolución, siempre que así lo requiera el Derecho Internacional y no concurra cosa juzgada conforme a estándares internacionales de independencia, imparcialidad y debido proceso.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en la presente ley orgánica.

Disposición final única.

La presente ley orgánica entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

A la Mesa del Congrés dels Diputats

El Grup Parlamentari Republicà, a instància del Diputat Francesc-Marc Álvaro i Vidal i de la Diputada Pilar Vallugera i Balañà, a l'empara del que s'estableix en l'article 124 i següents, del vigent Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició de Llei Orgànica per la recuperació de la justícia universal pel seu debat en Ple.

Congrés dels Diputats, 3 octubre de 2025.—**Pilar Vallugera i Balañà i Francesc-Marc Álvaro i Vidal,** Diputats.—**Gabriel Rufián Romero,** Portaveu del GP Republicà.

PROPOSICIÓ DE LLEI ORGÀNICA PER LA RECUPERACIÓ DE LA JUSTÍCIA UNIVERSAL

Exposició de motius

El principi de justícia universal és una conquesta irrenunciable de la humanitat i del sistema de normes i principis que les societats democràtiques han de defensar a ultrança per governar les relacions internacionals. Segons aquest principi, cal garantir que els crims de dret internacional es puguin perseguir des de qualsevol país per assegurar que mai quedaran impunes. Aquesta perspectiva té una base moral sòlida i forma part del sistema de justícia internacional més enllà dels interessos i valors purament estatals o particulars.

cve: BOCG-15-B-267-1

Aquesta defensa dels drets humans és més necessària que mai en un context de debilitament del sistema multilateral, inclòs el Tribunal Penal Internacional, i de greus crisis humanitàries que tenen responsables i víctimes. Els genocidis a Gaza i al Sudan i les violacions del dret internacional humanitari en les desenes de conflictes en curs interpel·len els estats a perseguir aquests crims precisament per protegir els principis generals consagrats pel dret internacional.

L'Estat espanyol ha subscrit múltiples compromisos internacionals en matèria de justícia universal. En concret i entre d'altres: l'article 7 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, de 1966, subscrit per l'Estat espanyol el 1977, que estipula que ningú serà sotmès a tortures ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants; l'article 6 de la Convenció de l'ONU contra la tortura i altres tractes o penes cruels, inhumanes o degradants, de 1984, que estableix un mandat als estats per tal que investiguin aquest tipus de fets, almenys de manera preliminar, sense fer dependre aquest deure de la nacionalitat o vincle del possible reu amb l'estat; i, per últim, el Conveni per la protecció dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals, de 1950, del Consell d'Europa, que regula l'obligació dels Estats de protegir la vida i el deure de reconèixer a qualsevol persona de la seva jurisdicció, els drets reconeguts en el conveni en qüestió. De la mateixa manera, la Resolució 60/147 de l'Assemblea General de Nacions Unides, de 16 de desembre de 2005, aprovà els principis i directrius bàsiques sobre el dret de les víctimes de violacions de normes internacionals de drets humans i el dret internacional humanitari a interposar recursos i obtenir reparacions. Uns principis continguts a la Resolució 2005/35, de 19 d'abril de 2005, de la Comissió de Drets Humans.

A aquestes obligacions se li sumen les adquirides per l'Estat espanyol amb la ratificació de la Declaració sobre la protecció de totes les persones contra les desaparicions forçades, de 18 de desembre de 1992, i la Convenció Internacional per a la protecció de les persones contra les desaparicions forçoses, de 20 de desembre de 2006. També cal destacar les directrius sobre protecció de les víctimes d'actes terroristes adoptades pel Comitè de Ministres del Consell d'Europa, el 16 de març de 2005.

A la llum d'aquestes obligacions, l'Estat espanyol té el deure de fer comparèixer davant la justícia als autors de delictes de dret internacional, sense condicionaments ni limitacions per raó de país, de persona que els cometi o de víctima, tal i com ha ratificat el Tribunal Constitucional. Això suposa el deure d'incorporar al dret intern aquests delictes, per garantir la rendició de comptes sobre crims de dret internacional i per garantir que els tribunals de l'Estat espanyol realitzen aquesta tasca.

La Llei Orgànica 6/1985, del Poder Judicial, reconeixia en el seu article 23.4 el principi de justícia universal a l'Estat espanyol. Tot i això, els darrers 16 anys, aquest principi ha estat objecte de dues importants reformes que l'han deixat pràcticament inaplicable. El novembre de 2009, la modificació de la Llei Orgànica del Poder Judicial va limitar l'abast de la persecució de delictes internacionals a aquells que mantinguessin una «connexió rellevant» amb el Regne d'Espanya i sempre i quan no s'hagués iniciat una altra investigació pels mateixos fets. Uns requisits que contradiuen la pròpia naturalesa del delicte i del principi de concurrència que regeix la jurisdicció universal. Aquesta reforma fa impossible garantir que no quedin impunes vulneracions de drets humans en què no es poden determinar les connexions amb cada estat de forma prèvia a la seva investigació.

La segona reforma, de març de 2014, va suposar a la pràctica la fi del principi de justícia universal, exigint que el presumpte autor fos de nacionalitat espanyola o resident habitual a l'Estat. També va suprimir les acusacions populars de l'exercici de la jurisdicció universal, una eina clau per tal que entitats de drets humans i ONGs ajudin a fer justícia en delictes de dret internacional, limitant així l'acció penal al ministeri fiscal i acusacions particulars. A causa d'aquesta reforma es van arxivar causes com els genocidis al Tibet, Ruanda o Guatemala, les tortures a Guantánamo o l'assassinat de José Couso a mans de soldats nordamericans a l'Iraq, l'any 2023.

cve: BOCG-15-B-267-1

Aquesta proposició de llei pretén recuperar una autèntica jurisdicció universal a l'Estat espanyol, que havia permès perseguir crims a Argentina, Xile o Guatemala, revertint una tendència cada cop més restrictiva en l'aplicació d'aquest principi que posa en entredit la qualitat de la justícia espanyola. La justícia universal constitueix un dret i un deure per als estats de perseguir les pitjors vulneracions de drets humans, sense limitacions processals, de competència territorial o de nacionalitat dels seus autors.

Aquesta reforma també torna a alinear la legislació espanyola amb la de països de l'entorn europeu que incorporen el principi de jurisdicció universal sense vinculació d'interessos estatals o particulars. En són exemples l'article 7 de la Llei de 16 de juny de 1993 de Bèlgica, reformada per la Llei del 5 d'agost de 2003; la reforma del codi penal del 17 de desembre de 2024 de Dinamarca; a Suècia, la Llei de responsabilitat criminal per genocidi, crims contra la humanitat i crims de guerra de 2014; l'article 7.5 del Codi Penal d'Itàlia; o el Codi de Crims contra el Dret Internacional d'Alemanya, on els darrers anys s'han perseguit crims de guerra i contra la humanitat a Ruanda, Síria o Gàmbia.

Per aquests motius, aquesta Proposició de Llei modifica l'article 23 de la Llei Orgànica 6/1985 del Poder Judicial. En concret, es modifica l'apartat 2 per limitar l'aplicació de la jurisdicció universal a casos on l'acusat ja hagi estat absolt o condemnat. També es modifica la llista de delictes previstos pel dret internacional que es puguin perseguir des d'una perspectiva de la justícia universal, eliminant els condicionants que impossibilitaven l'aplicació d'aquest principi com a resultat de les reformes anteriors. En darrer lloc, s'inclou una disposició transitòria per permetre reobrir aquells processos arxivats com a resultat de l'aplicació de la reforma de la Llei Orgànica 1/2014, de 13 de març.

Article únic. *Modificació de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial.*

La Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial, es modifica en els següents termes:

Primer. Es modifiquen els apartats 2, 4 i 5 de l'article 23 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial, quedant tots ells redactats de la següent manera:

«2. També coneixerà la jurisdicció universal dels delictes que hagin estat comesos fora del territori nacional, sempre que els criminals responsables fossin espanyols o estrangers que haguessin adquirit la nacionalitat espanyola amb posterioritat a la comissió del fet i concorreguessin els següents requisits:

a) Que el fet sigui punible al lloc d'execució, exceptuant que, en virtut d'un Tractat Internacional o d'un acte normatiu d'una Organització internacional de la que Espanya en sigui part, no resulti necessari aquest requisit, sens perjudici del què es disposa als apartats següents.

b) Que la víctima, el ministeri fiscal o persones jurídiques legalment constituïdes i sense ànim de lucre, l'objecte principal estatutari dels quals sigui la defensa dels drets humans, interposin querella o denúncia davant dels tribunals espanyols. Aquest requisit es considerarà complert en relació als delictes competència de la Fiscalia Europea quan aquesta exerceixi efectivament la seva competència.

c) Que el delinqüent no hagi estat absolt, amnistiat, indultat o penat a l'estranger o, en aquest darrer cas, no hagi complert la condemna. Si només l'hagués complert en part, se li tindria en compte per rebaixar-li proporcionalment la que li correspon.

Sens perjudici de l'anterior, les mesures de gràcia no exclouran l'exercici jurisdiccional quan la seva tramitació o concessió vulneri els tractats internacionals subscrits per Espanya, en especial els de drets humans. Tampoc ho farà

cve: BOCG-15-B-267-1

l'absolució per prescripció si el delicte és imprescriptible segons els tractats internacionals o el dret penal espanyol.»

«4. Igualment, serà competent la jurisdicció espanyola per conèixer els fets comesos per espanyols, estrangers o persones jurídiques fora del territori nacional susceptibles de tipificar-se, segons la llei espanyola, com a algun dels següents delictes:

a) Genocidi, de lesa humanitat o contra les persones i béns protegits en cas de conflicte armat.
b) Terrorisme.
c) Tortura i delictes contra la integritat moral dels articles 174 a 177 del Codi Penal.
d) Pirateria, apoderament il·lícit d'aeronaus i delictes contra la seguretat de la navegació marítima.
e) Delictes contra la seguretat de l'aviació civil.
f) Delictes relatius a la protecció física de materials nuclears, sempre que el delicte s'hagi comès per un ciutadà espanyol.
g) Delictes relatius a la prostitució i corrupció de menors i incapacitats.
h) Tràfic il·legal de drogues psicotròpiques, tòxiques i estupefaents.
i) Tràfic d'éssers humans i tràfic il·legal o immigració clandestina de persones, siguin o no treballadores.
j) Delictes relatius a la mutilació genital femenina.
k) Delictes relatius a la violència contra la dona i la violència domèstica, sempre que el procediment es dirigeixi contra un espanyol, contra un estranger resident a Espanya, o si el delicte s'hagués comès contra una víctima espanyola o resident a Espanya.
l) Falsificació de moneda estrangera.
m) Delictes de corrupció entre particulars o en les transaccions econòmiques internacionals.
n) Delictes de desaparició forçosa.
o) Delictes d'esclavatge.
p) Delictes greus contra el medi ambient que estiguin previstos als tractats internacionals.
q) Qualsevol altre delicte que, segons els tractats i convenis internacionals, en particular els Convenis de dret internacional humanitari i de protecció dels éssers humans, hagin de o puguin ser perseguits a Espanya.

La competència per jurisdicció universal subsistirà encara que hi hagi un procediment en curs a un altre Estat o Tribunal Internacional, exceptuant si aquest Estat o Tribunal garanteix de forma plena, independent i imparcial la investigació i enjudiciament conforme a estàndards internacionals, valorant-se especialment els drets de les víctimes.»

«5. Als supòsits dels apartats 3 i 4 els seran d'aplicació el disposat a la lletra c) de l'apartat 2 d'aquest article.»

Segon. Es suprimeix l'apartat 6 de l'article 23 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial.

Disposició transitòria única.

Els processos sobreseguts o arxivats en aplicació de la Llei Orgànica 1/2014, de 13 de març, de modificació de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial, hauran de ser reoberts d'ofici als jutjats o tribunals encarregats de la instrucció o els que coneixien d'aquests casos en el moment d'entrada en vigor de la Llei Orgànica 1/2014. L'establert en aquesta disposició transitòria aplicarà amb independència de l'estat

cve: BOCG-15-B-267-1

d'aquests processos, dels recursos presentats i del tribunal que conegués la seva resolució, sempre que així ho requereixi el Dret Internacional i no concorri cosa jutjada conforme a estàndards internacionals d'independència, imparcialitat i degut procés.

Disposició derogatòria única.

Queden derogades totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposin a l'establert en aquesta Llei Orgànica.

Disposició final única.

La present Llei Orgànica entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació al «Butlletí Oficial de l'Estat».

cve: BOCG-15-B-267-1